

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 82/2021

**ACTOR: MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA,
NUEVO LEÓN**

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta al **Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, instructor en el presente asunto**, con el expediente de la controversia constitucional al rubro indicada, turnada conforme al auto de radicación de siete de los mismos mes y año. Conste.

Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil veintiuno.

Visto el escrito y los anexos de quienes se ostentan como Presidente y Síndica Segunda del **Municipio de General Zuazua, Nuevo León**, mediante los cuales promueven controversia constitucional contra la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad federativa y su Fiscalía Especializada en Delitos Electores, en la que impugnan lo siguiente:

“ACTO DESTACADO --- LA VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN PARTICULAR POR VIOLAR LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL, LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PERTENECIENTE AL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR EL ACTO Y LOS EFECTOS DEL ILEGAL CATEO, INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS Y DETENCIONES ILEGALES EN CONTRA DE ESE AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. --- Sirviendo de antecedente el CATEO ILEGAL, LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES, Y DETENCIÓN ILEGAL realizado por las Autoridades demandadas, respecto del PRIMER REGIDOR DANIEL MARTÍNEZ LOZANO, en fecha 19 de mayo de 2019 en el recinto oficial de este Ayuntamiento de General Zuazua por supuesta flagrancia de delitos electorales, situación que calificó el pasado 21 de mayo del año en curso de ILEGAL el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Poder Judicial del Estado en la audiencia de control de detención; para lo cual, se registró la carpeta judicial 8682/2021, quien además tiene fuero constitucional conforme al artículo 112 de la Constitución Local del Estado de Nuevo León, así como la extracción de diverso equipo de cómputo del Presidente Municipal, y cateo ilegal en todo el recinto oficial de ese ayuntamiento, POR LO QUE SE RECLAMAN ADEMÁS LOS EFECTOS DE LOS ACTOS DE AUTORIDADES RESPONSABLES, EFECTOS MEDIATOS, INMEDIATOS, DIRECTOS O INDIRECTOS, ASÍ COMO CONTRA CUALQUIER ORDEN ILEGAL DE ALLANAMIENTO, CATEOS, DETENCIÓN, INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES SIN AUTORIZACIÓN DE UN JUEZ COMPETENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. --- De manera vinculada al acto reclamado destacado se reclaman: --- 2.- EL ACTO, LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ALLANAMIENTO Y CATEO ILEGAL realizado por las Autoridades demandadas en las instalaciones del Palacio Municipal del municipio de General Zuazua, Nuevo León ubicadas en el número 111 de la Avenida Juárez en el centro del municipio de General Zuazua, Nuevo León, instalaciones, oficinas, recintos y archivos, sin orden alguna de cateo

legalmente expedida por Autoridad Judicial que fundara y motivara la causa del procedimiento, el día 19 de mayo del 2021, y en días posteriores, SIN ORDEN ALGUNA Y DE MANERA VIOLENTA, presentándose elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones por instrucciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado, accediendo en días posteriores a las instalaciones del municipio en horario fuera de labores de acceso al público, por lo que se reclaman las subsecuentes actuaciones de las autoridades responsables de allanamiento, cateos ilegales, intervención de comunicaciones sin autorización de un juez federal. --- 2.- **EL ACTO, LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA ILEGAL SUSTRACCIÓN DE INFORMACIÓN E INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES** extraídos realizado por las Autoridades demandadas del equipo de cómputo ilegalmente incautado de las oficinas interiores del Palacio Municipal de General Zuazua, Nuevo León y utilizados para interrogar a beneficiarios de Programas Sociales otorgado por las autoridades municipales y que constituían la información almacenada en dichos aparatos computacionales --- 3. **EL ACTO, LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA Y COACCIÓN MORAL REALIZADO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN CONTRA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN PARTICULAR DE LAS MUJERES**, para obtener declaraciones, entrevistas a personal del municipio, dentro del palacio municipal sin estar ordenados y legalmente notificados al municipio y a la guardia de policía del municipio. --- 4.- La sustracción, decomiso y retención ilegal realizado por las Autoridades demandadas, respecto de dos equipos de cómputo que se encontraban asignados y ubicados en la Oficina particular del C. Secretario del Ayuntamiento y en la Oficina del suscrito Presidente municipal, **SIN AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES DE UN JUEZ FEDERAL EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.**”

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 4, párrafo tercero¹, 11, párrafos primero y segundo², de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene a los promoventes por presentados con la personalidad que ostentan³, así como designando **autorizados y delegado**.

Luego, con fundamento en lo previsto en el artículo 12⁴ del **Acuerdo General número 8/2020**, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema

¹ Artículo 4 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. (...)

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado.

² Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...)

³ De conformidad con las documentales que al efecto exhiben y en términos del numeral siguiente:

Artículo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. Para el ejercicio de la personalidad jurídica del Municipio, se atenderá a los siguientes supuestos:

I. Representación del Ayuntamiento: Será ejercida de manera mancomunada por el Presidente Municipal y el Síndico o Síndico Segundo según corresponda; y podrá delegarse esta representación en favor de cualquier integrante del Ayuntamiento, en cuyo caso, se requiere acuerdo del propio Ayuntamiento; (...)

⁴ Artículo 12 del Acuerdo General 8/2020. Las partes, por conducto de los servidores públicos que en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlos de conformidad con el artículo 11 de la Ley Reglamentaria, podrán solicitar para sí o para un tercero, ya sea por vía electrónica o impresa, acceso para consultar el Expediente electrónico

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 82/2021

Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este Alto Tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos; se acuerda favorablemente al delegado que mencionan la autorización de acceso al expediente electrónico, toda vez que éste cuenta con firma electrónica (FIREL) vigente, según la consulta realizada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF), al tenor de la constancia que se anexa a este proveído.

Esto, en el entendido de que podrá acceder al mismo una vez que el presente proveído se integre al expediente en que se actúa, en la inteligencia de que, conforme a la última parte del párrafo segundo del citado artículo 12, el acceso estará condicionado a que la firma en relación con la cual se otorgue la autorización, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al expediente.

Asimismo, la consulta al expediente electrónico se podrá llevar a cabo una vez que el presente proveído se notifique por lista, en términos del artículo 14, párrafo primero⁵, del Acuerdo General número 8/2020.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, párrafo primero⁶, del citado Acuerdo General 8/2020, **se autoriza la recepción de notificaciones electrónicas al municipio actor**, la cual surtirá sus efectos con motivo de la notificación por lista de este proveído, en la inteligencia de que las siguientes determinaciones jurisdiccionales que en su caso se emitan se notificarán a la parte respectiva por vía electrónica en tanto no revoque la referida solicitud.

respectivo, para lo cual deberán proporcionar su Clave Única de Registro de Población, así como la del tercero para el cual se solicita la autorización correspondiente.

Con base en la referida petición se verificará si el autorizante cuenta con la capacidad procesal necesaria. De ser así, se verificará en el Sistema Electrónico de la SCJN si la o las diversas personas -incluyendo al autorizante cuando solicita acceso al Expediente electrónico-, respecto de las cuales se solicita la autorización para ingresar al Expediente electrónico cuentan con la FIREL o con los certificados digitales referidos en el artículo 5 de este Acuerdo General, ante lo cual se acordará favorablemente la autorización solicitada únicamente respecto de las personas que cuenten con alguna de esas firmas; en la inteligencia de que el acceso respectivo estará condicionado a que la firma en relación con la cual se otorgue la autorización respectiva, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al expediente de que se trate. La autorización para consultar el Expediente electrónico conlleva la de oír y recibir notificaciones por vía electrónica, siempre y cuando se hubiere solicitado expresamente recibir notificaciones electrónicas en términos del artículo 17 del presente Acuerdo General.

⁵ **Artículo 14 del Acuerdo General 8/2020.** Cualquier autorización para consultar un Expediente electrónico surtirá efectos una vez que se acuerde favorablemente y el proveído respectivo se notifique por lista y se integre a dicho expediente. (...)

⁶ **Artículo 17.** Las partes podrán en todo momento, por vía impresa o electrónica, manifestar expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas. El proveído que acuerde favorablemente dicha solicitud se notificará por lista o por oficio según corresponda legalmente; en la inteligencia de que las siguientes determinaciones jurisdiccionales se notificarán a la parte respectiva por vía electrónica en tanto no revoque la referida solicitud. (...)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 82/2021

De igual manera, hágase de su conocimiento que en términos del artículo 28⁷ del referido acuerdo general, las notificaciones respectivas se tendrán por realizadas cuando acceda al expediente electrónico y consulte el acuerdo respectivo, sin menoscabo de que al tenor del diverso artículo 29⁸ del acuerdo general en comento, dichas notificaciones se tengan por realizadas en caso de que no se consulte el auto respectivo en el expediente electrónico, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que aquél se haya ingresado en éste.

Por otra parte, se le apercibe que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que pueda dar a la información derivada de la consulta al expediente electrónico autorizado, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de las Leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica tanto del municipio solicitante, como de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, aun cuando hubieran sido aportadas sin indicar su naturaleza confidencial o reservada.

Ahora bien, en el caso **existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia**, por lo que **debe desecharse el presente medio de control de constitucionalidad**, en atención a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

Conforme a lo establecido en el artículo 25⁹ de la ley reglamentaria de la materia, el Ministro instructor está facultado para desechar de plano la demanda respectiva, si advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita a continuación:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia

⁷ **Artículo 28 del Acuerdo General 8/2020.** Atendiendo a lo establecido en el artículo 6o., párrafo primero, de la Ley Reglamentaria, las notificaciones electrónicas realizadas en los términos previstos en este Acuerdo General, surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que la parte por conducto de su representante legal, o cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar el Expediente electrónico de que se trate, acceda a éste y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la Constancia de notificación respectiva.

⁸ **Artículo 29.** Dichas notificaciones también surtirán sus efectos, respecto de las partes que hayan manifestado expresamente recibirlas por vía electrónica, en el supuesto de que no hubieren consultado el acuerdo respectivo en el Expediente electrónico correspondiente, al día posterior a los dos días hábiles siguientes al en que se haya ingresado dicho proveído en ese expediente.

⁹ **Artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.** El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa".¹⁰

Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

En efecto, de la simple lectura de la demanda y sus anexos, es posible advertir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII¹¹, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i)¹² de la Constitución Federal, **debido a que la litis planteada en la demanda no se relaciona con la invasión de esferas competenciales, sino con meros aspectos de legalidad.**

Al respecto, resulta pertinente precisar, por principio de cuentas, que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la ley reglamentaria de la materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen, siendo aplicable a este respecto la tesis de rubro y texto siguientes:

¹⁰ Tesis P./J. 128/2001, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, octubre de 2001, registro 188643, página 803.

¹¹ Artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley. (...)

¹² Artículo 105 de la Constitución Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (...)

i).- Un Estado y uno de sus Municipios; (...)

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, la improcedencia de la controversia constitucional únicamente debe resultar de alguna disposición de la propia ley y, en todo caso, de la Norma Fundamental, por ser éstas las que delinean su objeto y fines; de ahí que la improcedencia no puede derivar de lo previsto en otras leyes, pues ello haría nugatoria la naturaleza de ese sistema de control constitucional.”¹³

En principio, cabe señalar que la controversia constitucional entraña un conflicto sobre la constitucionalidad de actos u omisiones y/o disposiciones generales de los sujetos que el artículo 105 de la Constitución Federal reconoce como partes en este tipo de juicios, ya que desde su concepción por el Poder Constituyente, esta garantía jurisdiccional fue diseñada para que este Alto Tribunal definiera el ámbito de atribuciones que la Constitución General de la República confiere a los órganos originarios del Estado, tal como fue señalado por el Tribunal Pleno en la tesis siguiente:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.

Del análisis de la evolución legislativa que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de control constitucional denominado controversia constitucional, se pueden apreciar las siguientes etapas: 1. En la primera, se concibió sólo para resolver las que se presentaren entre una entidad federada y otra; 2. En la segunda etapa, se contemplaron, además de las antes mencionadas, aquellas que pudiesen suscitarse entre los poderes de un mismo Estado y las que se suscitaren entre la Federación y uno o más Estados; 3. En la tercera, se sumaron a las anteriores, los supuestos relativos a aquellas que se pudiesen suscitar entre dos o más Estados y el Distrito Federal y las que se suscitasen entre órganos de Gobierno del Distrito Federal. En la actualidad, el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amplía los supuestos para incluir a los Municipios, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión, a cualquiera de sus Cámaras, y en su caso, a la Comisión Permanente. Pues bien, de lo anterior se colige que la tutela jurídica de este instrumento procesal de carácter constitucional, es la protección del ámbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122, de la propia Constitución y no así a los órganos derivados o legales, pues estos últimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no están sujetos al medio de control, ya que, si bien el espectro de la tutela jurídica se da, en lo particular, para preservar la esfera competencial de aquéllos y no de éstos, en lo general se da para preservar el orden establecido en la Constitución Federal, a que

¹³ P./J. 32/2008, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, junio de 2008, registro 169528, página 955.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 82/2021

también se encuentran sujetos los entes públicos creados por leyes secundarias u ordinarias.”¹⁴

De este modo, si bien este Alto Tribunal puede revisar la constitucionalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado a través de la controversia constitucional, para hacerlo está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial salvaguardada en la Constitución Federal a favor del actor, pues de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afectaría al promovente en la esfera de atribuciones tutelada en la Norma Fundamental.

Precisado esto, de los antecedentes narrados por los promoventes y los anexos de la demanda, se advierte lo siguiente:

1. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se presentaron en el recinto oficial de la Presidencia Municipal de General Zuazua, Nuevo León, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electores del Estado y la Agente de Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Tres Especializada en Delitos Electorales, a efecto de requerir información respecto a expedientes laborales de diversas personas, recibos de nómina y cualquiera que guardara relación con los hechos que se investigaban; siendo que las acciones de los elementos señalados, mencionan los promoventes, se apartaron de los términos del oficio correspondiente, realizando entrevistas bajo intimidación, amenazas y coerción, en particular a las mujeres; interviniendo comunicaciones privadas, tomando el equipo de cómputo de personal administrativo y jurídico, sin contar con autorización judicial, llevándose a cabo un cateo ilegal, confiscando la computadora y teléfono celular del Secretario del Ayuntamiento Daniel Martínez Lozano y procediendo a la detención de éste sin orden de aprehensión.

Además, se exhibió públicamente la detención del Secretario del Ayuntamiento, no obstante de no ser oído y vencido en juicio, y, con la información obtenida, se localizó a los beneficiarios de programas sociales para presionarlos a que declararan sobre sí se les condicionaba la entrega de beneficios a cambio de apoyo a la campaña política y voto a favor de la actual presidencia municipal.

2. En la citada fecha, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ordenó tramitar el incidente de suspensión del juicio de amparo

¹⁴ P. LXXII/98, Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Diciembre de 1998, registro 195025, página 789.

promovido por Daniel Martínez Lozano, concediendo la suspensión provisional para el efecto de que en cuanto a su libertad personal se refiere, quede a disposición de ese Juzgado de Distrito, en el lugar donde se encuentra recluso, hasta en tanto, se notifique lo que sobre la suspensión definitiva se resuelva. Asimismo, se señaló el veintiséis de mayo siguiente, para llevar a cabo la audiencia incidental.

3. El veintiuno de mayo del presente año, la Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Poder Judicial de Nuevo León, en la audiencia de control de detención, calificó de ilegal la detención de Daniel Martínez Lozano por supuesta flagrancia de delitos electorales, ordenando su liberación inmediata, y señalando el veinticuatro de junio del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación de persona en libertad, por lo que hace al ilícito de delitos electorales.

De esta forma, la parte actora impugna el cateo en las instalaciones del Palacio Municipal, intervención de comunicaciones y la detención del Secretario del Ayuntamiento, así como sus efectos, realizados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electores y el Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Tres Especializada en Delitos Electorales, ambos de Nuevo León.

Lo anterior, aduciendo que dichos actos vulneran la autonomía municipal prevista en el artículo 115 de la Constitución Federal, en particular por violar la afectación patrimonial, la integración y funcionamiento del Ayuntamiento, pues la actuación de las autoridades responsables quebrantan lo previsto en el numeral 16 constitucional, que contempla un estándar de control constitucional para realizar ordenes de cateo e intervención de comunicaciones, lo cual no aconteció en el caso concreto.

En ese tenor, el poder actor pretende que se estudie el ilegal o no cateo, la intervención de comunicaciones y la detención del Secretario del Ayuntamiento, por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electores y el Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Tres Especializada en Delitos Electorales, ambos de Nuevo León, lo cual es improcedente vía controversia constitucional, porque **no se evidencia una relación entre esos actos impugnados y la afectación al ejercicio directo e inmediato a una competencia de ese municipio indicada en la Norma Fundamental.**

Esto es, de la sola lectura de la demanda, es factible advertir que la litis que pretenden los promoventes es dilucidar, a través del presente medio de control

constitucional, aspectos de mera legalidad, consistentes en verificar el cateo, la intervención de comunicaciones y la detención del Secretario del Ayuntamiento, lo que no se refiere al análisis de la esfera competencial del Municipio actor ni de la Fiscalía Especializada en Delitos Electores, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como tampoco a la probable invasión de éstas, sino de la mera revisión de los actos controvertidos.

Así, la controversia constitucional resulta improcedente cuando las partes aleguen exclusivamente violaciones diversas a las competenciales, tales como las de estricta legalidad, salvo que el análisis de éstas sea necesario para definir el ámbito competencial de las partes en contienda.

Luego, aunque el poder accionante menciona que con los actos impugnados se vulneran los artículos 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el primer precepto citado no contiene una atribución, facultad o competencia exclusiva a favor del actor, sino ciertos requisitos que deben cumplir las autoridades para ejecutar actos de molestia, órdenes de aprehensión, cateo, intervención de comunicaciones privadas, entre otros aspectos del procedimiento penal, y, el segundo, se refiere a la integración y facultades del ayuntamiento, sin que en el caso se haya planteado la indebida asunción de competencias por parte del ente demandado en perjuicio del actor.

Así, no se impugnan actos que vulneren la esfera de competencias o facultades consagradas en la Norma Constitucional, esto es, no se trata de una impugnación abstracta respecto de una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de un conflicto de legalidad que no implica la determinación del alcance y contenido de algún precepto constitucional, para con ello establecer facultades del municipio actor o del demandado, ni su invasión por otro ente estatal.

En ese orden de ideas, si de la demanda se aprecia que la pretensión del Municipio actor no se trata de una impugnación abstracta respecto de una violación directa a la Constitución General de la República, sino de un conflicto de legalidad que no involucra violaciones a órbitas competenciales, entonces la controversia constitucional es improcedente.

Por lo expuesto, la presente demanda debe desecharse de plano, por actualizarse el **supuesto de improcedencia contenido en el artículo 19, fracción VIII**, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

Así las cosas, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo conducente es desechar este medio impugnativo, con apoyo en lo establecido en el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia y la jurisprudencia que se cita a continuación:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.”¹⁵

Con apoyo en el artículo 282¹⁶ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1¹⁷ de la ley reglamentaria de la materia, **se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído.**

Finalmente, agréguese al expediente para que surta efectos legales la impresión de la evidencia criptográfica de este proveído, en términos del Considerando Segundo¹⁸, artículo 9¹⁹ del Acuerdo General número 8/2020, del Punto Quinto²⁰ del **Acuerdo General número 14/2020, de veintiocho de julio de**

¹⁵ P./J. 9/98, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, registro 196923, página 898.

¹⁶ **Artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles.** El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.

¹⁷ **Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

¹⁸ **Considerando Segundo del Acuerdo General 8/2020.** La emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), decretada por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de dos mil veinte, ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio esencial de impartición de justicia y control constitucional a cargo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y, por otro, acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para hacer frente a la presente contingencia, como a otras que en el futuro pudieran suscitarse, a través del uso de las tecnologías de la información y de herramientas jurídicas ya existentes, como es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y

¹⁹ **Artículo 9.** Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del Ministro Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.

²⁰ **QUINTO del Acuerdo General 14/2020.** Los proveídos que corresponda emitir al Ministro Presidente y a las y los Ministros instructores, así como los engroses y votos se firmarán, electrónicamente. La versión impresa de esas determinaciones, en la que consten las respectivas evidencias criptográficas, se agregará sin necesidad de certificación alguna.

dos mil veinte, del Pleno de este Máximo Tribunal, por el que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte, así como del Punto Único²¹, del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en virtud del cual se prorroga del uno al treinta y uno de julio del mismo año, la vigencia de los Puntos del Tercero al Noveno del Acuerdo General número 14/2020.

Por las razones expuestas, se

ACUERDA

ÚNICO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de General Zuazua, Nuevo León.

Una vez que cause estado este auto, **archívese el expediente como asunto concluido.**

Notifíquese. Por lista y en su residencia oficial al Municipio de General Zuazua, Nuevo León.

En ese orden de ideas, **remítase la versión digitalizada del presente acuerdo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por conducto del MINTERSCJN, a fin de que genere la boleta que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, a efecto de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157²² de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 4, párrafo primero²³, y 5²⁴ de la ley reglamentaria de la materia, lleve a cabo la diligencia de notificación por oficio al Municipio de General Zuazua, Nuevo León, en su residencia oficial, de lo ya indicado; lo anterior, en la inteligencia**

²¹ **ÚNICO** del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte el veinticuatro de junio de dos mil veinte. Se prorroga del uno al treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, la vigencia de lo establecido en los puntos del Tercero al Noveno del Acuerdo General 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte.

²² **Artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.** Las diligencias que deban practicarse fuera de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia o del Consejo de la Judicatura Federal se llevarán a cabo por el ministro, consejero, secretario, actuario o juez de distrito que al efecto comisione el órgano que conozca del asunto que las motive.

²³ **Artículo 4 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.** Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía telegráfica. (...)

²⁴ **Artículo 5.** Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha.

de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298²⁵ y 299²⁶ del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el **MINTERSCJN**, hace las veces del **despacho número 682/2021**, en términos del referido artículo 14, párrafo primero²⁷, del Acuerdo General Plenario 12/2014, por lo que se requiere al órgano jurisdiccional respectivo, a fin de que en auxilio de las labores de este Alto Tribunal, a la brevedad posible, lo devuelva debidamente diligenciado por esa misma vía, **con la razón actuarial correspondiente**.

Cumplase.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo**, quien actúa con la **Maestra Carmina Cortés Rodríguez**, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

Esta hoja corresponde al proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictado por el **Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo** en la **controversia constitucional 82/2021**, promovida por el Municipio de General Zuazua, Nuevo León. Conste.

GMLM 2

²⁵ **Artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles.** Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberán encomendarse al Juez de Distrito o de Primera Instancia para asuntos de mayor cuantía del lugar en que deban practicarse.

Si el tribunal requerido no puede practicar, en el lugar de su residencia, todas las diligencias, encomendará, a su vez, al juez local correspondiente, dentro de su jurisdicción, la práctica de las que allí deban tener lugar.

La Suprema Corte de Justicia puede encomendar la práctica de toda clase de diligencias a cualquier autoridad judicial de la República, autorizándola para dictar las resoluciones que sean necesarias para la cumplimentación.

²⁶ **Artículo 299.** Los exhortos y despachos se expedirán el siguiente día al en que cause estado el acuerdo que los prevenga, a menos de determinación judicial en contrario, sin que, en ningún caso, el término fijado pueda exceder de diez días.

²⁷ **Artículo 14 del Acuerdo General Plenario 12/2014.** Los envíos de información realizados por conducto de este submódulo del MINTERSCJN deberán firmarse electrónicamente, en la inteligencia de que en términos de lo previsto en el artículo 12, inciso g), del AGC 1/2013, si se trata de acuerdos, actas o razones emitidas o generadas con la participación de uno o más servidores públicos de la SCJN o del respectivo órgano jurisdiccional del PJF, si se ingresan en documento digitalizado cuyo original contenga las firmas de éstos, bastará que la FIREL que se utilice para su transmisión por el MINTERSCJN, sea la del servidor público responsable de remitir dicha información; en la inteligencia de que en la evidencia criptográfica respectiva, deberá precisarse que el documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original. (...)

